

El principio de participación

En anteriores artículos de esta sección, se ha insistido en el concepto de Bien Común o de Destinación Universal de los Bienes. Habría que añadir que el Bien puede ser considerado común, en primer lugar, en cuanto al origen: es propio e irrenunciable de todas y cada una de las personas; también en cuanto a la realización, porque sólo puede ser alcanzado con el concurso y la participación de todos, en cuanto que “la persona no puede encontrar su realización sólo en sí misma”¹; y por último en cuanto al fin, que es el engrandecimiento de todas las personas y de toda la persona.

La sociabilidad humana no es uniforme, sino que reviste múltiples expresiones. El Bien Común depende, en efecto, de un sano pluralismo social. Las diversas sociedades están llamadas a constituir un tejido unitario y armónico, en cuyo seno sea posible a cada una conservar y desarrollar su propia fisonomía y autonomía.

La socialización expresa la tendencia natural que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las capacidades individuales. Desarrolla las capacidades de la persona, en particular, su sentido de iniciativa y de responsabilidad. Ayuda a garantizar sus derechos².

Consecuencia característica de la subsidiariedad es la *participación*, que se expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. Es, en suma, “el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales”³. Dada su importancia, se hace imprescindible la exigencia de favorecer la participación, sobre todo, de los más débiles, así como la alternancia de los dirigentes políticos, con el fin de evitar que se instalen privilegios ocultos. Es necesario además, un fuerte empeño moral, para que la gestión de la vida pública sea el fruto de la corresponsabilidad de cada uno con respecto al Bien Común⁴. El principio de participación se fundamenta en el derecho natural de todo ser humano a realizar su propio destino. En toda formación social la persona tiene derecho a hacer sentir el peso de su decisión personal responsable. El sujeto de la participación es todo hombre o mujer en cuanto miembro del grupo social.

Consta de tres factores:



- v El sujeto (toda persona en cuanto miembro del grupo social)
- v El objeto (la obra común)
- v El modo o procedimiento mediante el cual se realiza la participación.

Debe procurarse que toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título a considerarse “copropietario” de esa especie de gran taller de trabajo en el que se compromete con todos. Un camino para conseguir esa meta podría ser el de asociar, en cuanto sea posible, el trabajo a la propiedad del capital y dar vida a una rica gama de cuerpos intermedios con finalidades económicas, sociales, culturales: cuerpos que gocen de una autonomía efectiva respecto a los poderes públicos, que persigan sus objetivos específicos manteniendo relaciones de colaboración leal y mutua, con subordinación a las exigencias del Bien Común y que ofrezcan forma y naturaleza de comunidades vivas⁵.

Se pueden encontrar significativos ejemplos de auto-organización en las numerosas iniciativas, privadas y sociales, caracterizadas por formas de participación, de cooperación y de autogestión, especialmente a nivel de los grupos intermedios, que revelan la fusión de energías solidarias. Por lo tanto, este principio opera en todos los niveles de la convivencia, dentro de los cuales interviene la persona humana como agente insustituible de la calidad de la vida en común y como garantía de la recta ordenación de ésta y de su necesaria subordinación al hombre. Es un derecho natural primario de éste el de realizar su propio destino también en lo social. La participación se convierte así en vehículo del ejercicio de la libertad humana.

Es importante tener en cuenta que la participación es no sólo un derecho, sino también un deber del gobernado, porque éste tiene la obligación de actuar. La persona no puede quedar reducida a simple sujeto pasivo de la acción de su gobierno. No se puede convertir en simple receptorista o beneficiario de los bienes sociales. El



principio de participación es por tanto un derecho-deber que lleva al hombre y la mujer a participar en las esferas públicas y privadas, según las circunstancias, cooperando al Bien Común, ya que afecta a todos los ámbitos de la vida económica, política y social. Además, crece cada día la aspiración a la libertad, a la igualdad y a la participación, que tiene también sus amenazas en las oligarquías y la tecnocracia. Es por eso que, en el ámbito de la afirmación y defensa de los derechos humanos, se incluye el de toda persona a participar en la construcción de la sociedad, ya que “la salud de una comunidad política, en cuanto se expresa mediante la libre participación y responsabilidad de todos los ciudadanos en la gestión pública, la seguridad del derecho, el respeto y la promoción de los derechos humanos, es condición necesaria y garantía segura para el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres”⁶. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece en su artículo 21.1 que “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”; en el 21.2 que “Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”; y en el 27.1: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de

las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.

Es posible que, en ocasiones determinadas, la no participación, es decir, la actitud de abstención, esté moralmente justificada, por razones de conciencia; pero, incluso en estos casos, puede verse como una forma de participación – aunque negativa-, pues pone de manifiesto una actitud de rechazo, sobre todo cuando por sus dimensiones cuantitativas expresa estados colectivos en ese sentido (negarse a participar en procesos electorales manifiestamente amañados, por ejemplo, constituye un voto en contra de los mismos)

Por medio de esta ordenada participación, que está unida al progreso en la formación económica y social, crecerá más entre todos el sentido de la responsabilidad propia, que los llevará a sentirse colaboradores, según sus medios y aptitudes propias, en la tarea del desarrollo económico y social y del logro del Bien Común Universal⁷

La evolución social del mundo contemporáneo ha motivado una elevación del interés que se concede al papel que los gobernados representan

en una sociedad civil y a la prevención de los excesos de poder económico y político, que pueden manifestarse de múltiples formas; algunas tan evidentes como el abuso de autoridad y otras más sutiles, como el manejo del progreso científico y técnico sin atender a los riesgos actuales y futuros de su introducción. Todo ello determina que este principio se convierta en salvaguarda de la dignidad vital de la persona humana a la vez que estímulo para su promoción.

Con el principio de participación se apunta de manera directa a otros dos principios permanentes que son el de la concepción orgánica de la vida social y el de la justicia social; ambos serán tratados en esta sección próximamente.

¹ Pontificio Consejo Justicia y Paz: Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Librería Editrice Vaticana, 2004.

² CCE, N° 1882.

³ Id. N° 1913.

⁴ SS Juan Pablo II. Carta enc. Centesimus annus, (1991) 836-838.

⁵ Juan Pablo II, Carta enc. Laborem excersens (1981) 616.

⁶ SS Juan Pablo II. Carta enc. Sollicitudo rei socialis (1988) 15.

⁷ Const. Past. Gaudium et Spes, N° 68.

¹ Médico, especialista en Laboratorio Clínico y Profesor Auxiliar. Diplomado en Antropología Filosófica y en Bioética. Vice-director del Centro Juan Pablo II y profesor del Instituto de Ciencias Teológicas “María Reina”.